

# NEW LEFT REVIEW 91

SEGUNDA ÉPOCA

MARZO - ABRIL 2015

## ARTÍCULOS

WANG CHAOHUA	¿La historia de éxito del pcch?	7
FRANCO MORETTI	Lukács y la novela	43

## ENTREVISTA

EVGENY MOROZOV	¡Socializar los centros de datos!	47
----------------	-----------------------------------	----

## ARTÍCULOS

GOPAL BALAKRISHNAN	Marx, el abolicionista II	71
MAURICIO VELÁSQUEZ	La batalla de Bogotá	106

## CRÍTICA

ANDERS STEPHANSON	Caleidoscopios del poder	129
BARRY SCHWABSKY	La pesadilla de Goethe	145
JEFFERY R. WEBER	La aurora rebelde	153

La nueva edición de la New Left Review en español se lanza desde la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación y el Instituto de Altos Estudios Nacionales de Ecuador-IAEN

[WWW.NEWLEFTREVIEW.ES](http://WWW.NEWLEFTREVIEW.ES)

© New Left Review Ltd., 2000

© Instituto de Altos Estudios Nacionales (IAEN), 2014, para lengua española

Licencia Creative Commons

Reconocimiento-NoComercial-SinObraDerivada 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)



INSTITUTO DE ALTOS ESTUDIOS NACIONALES  
LA UNIVERSIDAD DE POSGRADO DEL ESTADO



Secretaría de  
Educación Superior,  
Ciencia, Tecnología e Innovación



traficantes de sueños

[SUSCRÍBETE](#)

# COLOMBIA



MAURICIO VELÁSQUEZ

## LA BATALLA DE BOGOTÁ

*Colombia, entre la guerra y la paz*

**L**AS ELECCIONES PRESIDENCIALES colombianas de 2014 constituyeron un hito en la historia reciente del país: la primera gran derrota política soportada por el uribismo desde el comienzo del nuevo siglo. El candidato de extrema derecha Álvaro Uribe Vélez obtuvo una victoria aplastante en 2002 y fue reelegido por una cómoda mayoría cuatro años después. Después de que la Corte Constitucional de Colombia bloquease el intento de Uribe de presentar su candidatura para un tercer mandato, el sucesor nombrado por él, Juan Manuel Santos, apuntó otro triunfo para el bando uribista en 2010. Pero Santos y Uribe disintieron con acritud respecto a la cuestión de las conversaciones de paz con la guerrilla de las FARC, y esto llevó al expresidente a apoyar a Óscar Iván Zuluaga en los comicios de 2014. Zuluaga venció en la primera vuelta de las presidenciales, pero Santos lo derrotó en la segunda, con el apoyo de una coalición de fuerzas apresuradamente improvisada que abarcaba el arco político desde la izquierda hasta el centroderecha. El primer revés electoral de Uribe ha permitido que continúen las conversaciones entre Santos y los líderes de las FARC, manteniendo viva la posibilidad de alcanzar una solución negociada a un conflicto que perdura desde hace medio siglo y se ha cobrado más de 200.000 vidas.

### *El legado de Uribe*

Cuando Uribe subió al poder en 2002 con mayoría absoluta en primera vuelta, lo hizo en un país con un historial de hegemonía conservadora sin parangón en América Latina: ningún candidato de izquierda, ni siquiera populista, había sido jamás elegido para ocupar la presidencia colombiana. Este dominio oligárquico sin fisuras era a la vez causa y

consecuencia de la historia siniestramente violenta de Colombia, desde las guerras civiles del siglo XIX a La Violencia de las décadas de 1940 y 1950 y a los conflictos con los narcos y el terror paramilitar de décadas recientes<sup>1</sup>. El triunfo de Uribe constituyó, no obstante, un notable giro dentro de esta cultura política, puesto que marcó el fin de una diarquía conservadora-liberal que había durado más de un siglo. Uribe, liberal renegado, se presentó a las elecciones como candidato de su propia alianza, Primero Colombia. La década de 1990 había contemplado una explosión de nuevas formaciones políticas, a medida que los partidos tradicionales perdían legitimidad. Al asumir el cargo, sin embargo, descubrió que la fragmentación que le había permitido obtener la presidencia era un obstáculo para un gobierno eficaz: cambió las leyes electorales para imponer una disciplina de partido más estricta y umbrales de representación mínimos, y reunió a los parlamentarios que lo respaldaban en el Partido Social de Unidad Nacional, más conocido sencillamente como Partido de la U. Los liberales y los conservadores también se aliaron en torno a Uribe, al igual que otro grupo escindido de la derecha, Cambio Radical; la oposición parlamentaria la ejercían el Partido Verde, de centro, y el Polo Democrático Alternativo, de izquierda.

La piedra angular del programa de Uribe era un nuevo sistema de contra-insurgencia que rompía decisivamente con las fracasadas negociaciones de paz de su antecesor, Andrés Pastrana. Prometiéndole librar una guerra total contra las guerrillas de las FARC y el ELN, Uribe utilizó ampliamente la ayuda militar aportada por Washington bajo las condiciones establecidas en el Plan Colombia. Ideado por el gobierno de Clinton –su primer borrador estaba en inglés, no en español–, el Plan Colombia iba en apariencia dirigido a eliminar el narcotráfico, pero su verdadero objetivo era la insurgencia guerrillera, que se había expandido enormemente a comienzos de la década de 1990. Colombia se convirtió, durante la década siguiente, en el mayor receptor de ayuda militar estadounidense fuera de Oriente Próximo. Este aluvión de fondos, armas e instrucción militar del Pentágono permitió al ejército colombiano desplegar más soldados sobre el terreno, con un mayor ratio de militares profesionales/reclutas, y mejorar su armamento y sus capacidades para obtener información. Entre 1998 y 2002, el tamaño de las fuerzas armadas ya había

---

<sup>1</sup>Francisco Gutiérrez, *El orangután con sacoleva. Cien años de democracia y represión en Colombia (1910-2010)*, Bogotá, 2014, y Forrest Hylton, «Colombia: la hora crítica», NLR 23, noviembre-diciembre de 2003, ofrecen una sinopsis de esta historia. Me gustaría agradecer a Francisco Gutiérrez y Mahmood Mamdani su colaboración.

aumentado el 60 por 100, alcanzando los 132.000 miembros, y llegaría a 283.000 al final de la presidencia de Uribe<sup>2</sup>. Muchos de los avances territoriales efectuados por la guerrilla a lo largo de la década anterior fueron revertidos: el número de municipios en los que operaba disminuyó de 377 en 2002 a 142 en 2010. Entre 2002 y 2009, el ejército mató a más de 12.000 y capturó a más de 12.000 guerrilleros de las FARC, y a esto debe sumarse la desmovilización de más de 17.000<sup>3</sup>.

Al Estado colombiano le resultaba más fácil contraatacar a las FARC debido a lo que Forrest Hylton denominó en 2003 «la paradoja fundamental que entraña una progresiva deslegitimación política acompañada de un asombroso desarrollo organizativo»<sup>4</sup>. Las FARC habían expandido su presencia militar, de diecisiete frentes en 1978 a ciento cinco en 1994, aprovechando los ingresos derivados de un impuesto sobre la producción de coca y diversas formas de extorsión: se calcula que sus ingresos anuales en la década de 1990 eran de 500 millones de dólares. Buena parte de esta expansión territorial no se basaba, sin embargo, en unas profundas raíces políticas, comparables a las asentadas en los baluartes guerrilleros tradicionales en los que las FARC llevaban décadas siendo la única autoridad real. A menudo la población local contemplaba a la guerrilla en estas nuevas zonas de conflicto como otro actor armado causante de problemas, y la afirmación de las FARC de ser un «ejército del pueblo» recibía poca aquiescencia popular. Las mismas prácticas que más ingresos proporcionaban a los fondos bélicos de las FARC y del ELN fueron también las que con más probabilidad alejaron a los insurgentes de la población civil.

El puño de acero utilizado por Uribe contra las guerrillas fue acompañado de una mano abierta hacia los paramilitares de derecha, que en la década de 1990 habían sido responsables de la mayoría de las conculcaciones de derechos humanos, dejando tras de sí un sangriento rastro de masacres y asesinatos. Bajo el liderazgo de los hermanos Castaño, Carlos y Fidel, los grupos paramilitares regionales se habían agrupado en un movimiento nacional, las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Las AUC respaldaron la candidatura de Uribe en 2002, y Carlos Castaño describió al nuevo presidente como «el hombre más cercano a nuestra

---

<sup>2</sup> International Crisis Group, *Colombia: ¿por fin la paz?*, Informe sobre América Latina, núm. 45, 25 de septiembre de 2012, pp. 2-3.

<sup>3</sup> *Ibid.*, pp. 3.

<sup>4</sup> F. Hylton, «Colombia: la hora crítica», cit., pp. 82-83.

filosofía». Uribe recompensó a esta rama de su coalición con la orwelliana Ley de Justicia y Paz, que ofrecía amnistiar a los jefes paramilitares a cambio de breves sentencias de cárcel y de una «desmovilización» mucho más honrada por el incumplimiento que por la observancia. El exembajador estadounidense Myles Frechette la describió como «una ley inmejorablemente diseñada para dar una salida a los criminales»<sup>5</sup>. Las AUC se retiraron, pero muchos escuadrones de la muerte de extrema derecha se reorganizaron bajo nuevas denominaciones –Águilas Negras, Rastrojos, etcétera– y continuaron con sus viejas prácticas. El informe de Amnistía Internacional sobre Colombia en 2010 ponía de manifiesto el carácter falaz del acuerdo entre Uribe y los dirigentes de las AUC:

Los grupos paramilitares siguieron operando en muchas partes del país, en ocasiones en connivencia con sectores de las fuerzas de seguridad. La continuación de sus actividades desmintió las afirmaciones del gobierno según las cuales todos los paramilitares habían depuesto las armas tras el programa de desmovilización auspiciado por el gobierno desde 2003 [...]; los métodos empleados por estos grupos para aterrorizar a la población civil, como amenazas de muerte y masacres, seguían las mismas pautas que los utilizados por los grupos paramilitares antes de la desmovilización<sup>6</sup>.

Uribe y sus aliados se habituaron a tachar a sus opositores internos de «simpatizantes del terrorismo»: equivalente verbal a colgarle a alguien una diana en la espalda. Colombia siguió siendo el país más peligroso del mundo para los sindicalistas. La peor parte de la violencia estatal y paramilitar se la llevaban, como siempre, la población rural marginada y los pobres urbanos. Uno de los principales logros de Uribe fue el de alejar de las clases medias y altas urbanas la carga del conflicto, principalmente reduciendo hasta diez veces el número de secuestros, de 3.572 en 2000 a 305 en 2011<sup>7</sup>. Otro espaldarazo a su popularidad se lo dio el crecimiento económico que experimentó Colombia al emerger de la profunda recesión sufrida a finales de la década de 1990. El crecimiento anual del PIB subió del 4,6 por 100 en 2003 al 5,7 en 2005 y al 8,2 por 100 en 2007, mientras que el desempleo cayó del 14,1 por 100 en 2003

<sup>5</sup> Juan Forero, «Report Adds to criticism of Colombian disarmament law», *The New York Times*, 1 de agosto de 2005.

<sup>6</sup> *Colombia: Informe 2010 Amnistía Internacional*. Véase también Human Rights Watch, *Herederos de los paramilitares: la nueva cara de la violencia en Colombia*, Nueva York, 2010.

<sup>7</sup> International Crisis Group, *Colombia: ¿por fin la paz?*, cit. p. 6. Algunas zonas rurales más ricas de la Región Andina y de los Llanos también se beneficiaron de la contrainsurgencia estatal, y se convirtieron en bastiones electorales del uribismo.

al 11,2 en 2007<sup>8</sup>. Buena parte de este crecimiento fue impulsado por los sectores de la minería y de los hidrocarburos, que en 2007 supusieron casi dos quintas partes de las exportaciones totales; el petróleo fue el producto de exportación que mayores beneficios generó, seguido del carbón<sup>9</sup>. Uribe fue reelegido en primera vuelta en las elecciones presidenciales de 2006, derrotando a su principal rival, Carlos Gaviria Díaz, del Polo Democrático Alternativo, por un amplio margen, aunque la abstención fue del 55 por 100 de modo que por Uribe votó poco más de la cuarta parte de los electores<sup>10</sup>. En lo que a los medios de comunicación anglófonos se refiere, en Bogotá las cosas no podían ir mejor: en un reportaje sobre el «paisaje cambiante» de Colombia publicado en 2007 por *The Guardian*, el corresponsal del periódico en América Latina informaba a los lectores de que «el presidente ha proporcionado a las ciudades lo que su población, ahíta de guerra, ansiaba: seguridad y, con ella, la oportunidad de una vida mejor [...], la esperanza de que Colombia esté superando su sangrienta historia es embriagadora»<sup>11</sup>. *The Economist* saludó «a la más rara de las bestias: un presidente demócrata y prooccidental que está ganando una guerra antiterrorista», y acusaba a los resentidos que «dan demasiada importancia a los asesinatos de sindicalistas en Colombia» de no ver la imagen general<sup>12</sup>.

### *Escándalos, obstáculos y sucesión*

El segundo mandato de Uribe estuvo marcado por una sucesión de escándalos derivados naturalmente de su programa contrainsurgente. Los tribunales habían anulado debido a la presión interna e internacional algunas de las disposiciones más indignantes de la Ley de Justicia y Paz, y los jefes paramilitares afrontaban la perspectiva de unas condenas de cárcel importantes. Resentidos contra lo que consideraban una traición,

---

<sup>8</sup> Economist Intelligence Unit, *Colombia: Country Profile 2008*, pp. 22, 27.

<sup>9</sup> *Ibid.*, pp. 24, 29.

<sup>10</sup> La primera victoria de Uribe en 2002 se basó en una participación del 46,5 por 100 de los votantes; la participación se mantuvo por debajo del 50 por 100 en las elecciones de 2010 y 2014.

<sup>11</sup> *The Guardian*, *Inside Colombia: A Changing Landscape*, 8 de junio de 2007, reportaje especial.

<sup>12</sup> «The Uribe Temptation», *The Economist*, 17 de abril de 2008. No sorprende, después de todo, que a algunos les pareciese necesario expresar su desaprobación al sindicalismo en términos tan enfáticos: «Aunque los colombianos deberían tener, y tienen, libertad para sindicarse, dice el señor Uribe, hay razones históricas para la desconfianza. En la década de 1960 los sindicatos estaban penetrados por marxistas que defendían toda forma de lucha, incluida la violencia».

los comandantes de las AUC empezaron a hablar abiertamente sobre sus vínculos directos con el gobierno de Uribe. Docenas de parlamentarios de Uribe, incluido su primo Mario, fueron juzgados como resultado de la llamada «parapolítica». Al final Uribe ordenó la extradición de catorce jefes paramilitares a Estados Unidos, en un intento de evitar las revelaciones<sup>13</sup>. La avalancha de controversias empezó también a afectar a la policía secreta, el DAS, cuyos altos mandos dependían directamente de presidencia. La revista de actualidad *Semana* publicó pruebas de un enorme programa de espionaje contra opositores a Uribe tales como su rival en las elecciones presidenciales de 2006, Carlos Gaviria Díaz, o el principal investigador de la «parapolítica», Iván Velásquez. Más perjudicial para el presidente fue que el jefe del DAS, Jorge Noguera, fuese acusado de complicidad en una serie de asesinatos paramilitares. Noguera, de quien Uribe había declarado que «pondría la mano en el fuego por él», cumple ahora una sentencia de veinticinco años de cárcel por su participación en el asesinato de un destacado sociólogo de Barranquilla<sup>14</sup>. El propio DAS fue en último término disuelto. La acusación más incriminatoria contra las políticas de seguridad de Uribe procedió, sin embargo, del escándalo de los «falsos positivos» que estalló en 2008. En un intento de satisfacer los objetivos de guerrilleros eliminados establecidos por los mandos militares, distintas unidades del ejército habían estado asesinando sistemáticamente civiles y vistiendo los cuerpos con uniformes de la guerrilla para sumarlos a las estadísticas de guerra. Juan Manuel Santos era ministro de Defensa de Uribe en el momento en el que la práctica estuvo más generalizada. Hasta el momento las investigaciones han demostrado al menos 3,300 de esos asesinatos cometidos entre 2002 y 2008<sup>15</sup>. El general Mario Montoya, otro de los estrechos colaboradores de Uribe, fue obligado a renunciar al cargo de comandante supremo de las Fuerzas Armadas como consecuencia de estas revelaciones.

De haberse hecho realidad las predicciones de rápido triunfo sobre las guerrillas, los admiradores extranjeros de Uribe podrían haber calificado estas manchas en el currículo del presidente de mero detalle histórico. La perspectiva de la victoria total pareció más embriagadora en 2008,

---

<sup>13</sup> Gary Leech, «Extradition of paramilitary leaders undermines para-politics investigation», *Colombia Journal*, 13 de mayo de 2008.

<sup>14</sup> Simón Romero, «A scandal over spying intensifies in Colombia», *The New York Times*, 17 de septiembre de 2009; «Ex-spy chief of Colombia is sentenced to prison», *The New York Times*, 14 de septiembre de 2011.

<sup>15</sup> Chris Kraul, «In Colombia, 6 sentenced in “false positives” death scheme», *Los Angeles Times*, 14 de junio de 2012.



cuando la muerte del dirigente de las FARC Raúl Reyes en un ataque del ejército colombiano fue seguido a las pocas semanas por la muerte natural de Manuel Marulanda, el septuagenario comandante en jefe del movimiento. Reyes fue víctima de una incursión aérea en territorio ecuatoriano mientras intentaba negociar la liberación de rehenes de las FARC, incluida la excandidata a la presidencia Ingrid Betancourt, y este hecho provocó un tenso pulso con los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez<sup>16</sup>. Marulanda fue sustituido por Alfonso Cano, que puso en marcha una reorganización de la estrategia guerrillera que crearía un dilema al sucesor de Uribe, Juan Manuel Santos.

Cuando los tribunales echaron abajo sus intentos de cambiar la Constitución y presentarse a un tercer mandato, Uribe se vio obligado a pasarle el bastón de mando a Santos. Poderosos sectores de opinión colombianos habían empezado a temer que una nueva ampliación de la presidencia de Uribe afectase a la estabilidad institucional del país, conduciendo a un despotismo del ejecutivo y quizá incluso a la guerra con los países vecinos. Santos había formado parte del gobierno de Uribe, ayudando al presidente a crear el Partido de la U y ocupando después el cargo de ministro de Defensa, en 2006. Tras asegurarse el refrendo del partido con permiso de Uribe, Santos superó el reto de su principal oponente, Antanas Mockus, del Partido Verde, en la segunda vuelta de las elecciones de 2010, en las que obtuvo el 70 por 100 de los votos emitidos (nuevamente, la abstención alcanzó el 55 por 100).

El nuevo presidente tenía una formación muy distinta de la de su mentor. Santos, un año mayor que Uribe, desciende de una familia de la elite: su tío abuelo Eduardo Santos fue presidente entre 1938 y 1942, y sus familiares eran hasta hace poco dueños del periódico más influyente de Colombia, *El Tiempo*. Graduado por la Universidad de Kansas y con estudios de posgrado en Harvard y la London School of Economics, Santos no se había presentado a candidato en ningunas elecciones hasta las presidenciales de 2010. Un periodo de nueve años como representante en Londres de la Federación Nacional de Cafeteros de Colombia fue seguido de los nombramientos como ministro de Comercio Exterior con César Gaviria y ministro de Hacienda con Andrés Pastrana. Este cómodo ascenso tecnocrático contrastaba drásticamente con la

---

<sup>16</sup> Luis Bruschtein, «Cuando fue asesinado, Reyes estaba negociando», *Página/12*, 4 de marzo de 2008; «Francia revela que Raúl Reyes era el contacto para negociar la liberación de Betancourt», *La Jornada*, 4 de marzo de 2008.

trayectoria de su predecesor. Uribe había ascendido laboriosamente por la escalera política, desde la periferia al centro, en una carrera que se prolongó dos décadas, y en la que ocupó los cargos de alcalde, senador y gobernador antes de llegar al palacio presidencial. Educado en la Universidad de Antioquia, solo entrado en los cuarenta asistió a cursos de verano en Harvard y completó un año de estudios en Oxford. Quizá era más relevante el hecho de que el padre de Uribe, un terrateniente rico, hubiera sido asesinado por las FARC en el transcurso de un intento de secuestro frustrado en 1983. Santos es mucho menos locuaz que Uribe, cuyo acento antioqueño podía oírse tronar a través de las ondas en cualquier oportunidad posible ante el desdén de la vieja elite económica bogotana: la parte más eficaz de su estilo de gobernar era quizá una oportuna inyección de silencio que mantuvo cierta ambigüedad respecto al carácter político del nuevo gobierno y llevó a algunos comentaristas a apodarlo el «jugador de póquer».

Santos rompió con algunas de las políticas más arriesgadas de Uribe, apresurándose a restablecer las buenas relaciones con Venezuela y Ecuador, y abrazar a Hugo Chávez, al que llamó «mi nuevo mejor amigo». Estas medidas fueron bien recibidas por directivos empresariales enfurecidos por la actitud fanfarrona de Uribe y los trastornos que esta causaba en el comercio interfronterizo con dos de los socios comerciales más importantes de Colombia; mucho más en medio de una crisis económica mundial que amenazaba con echar por tierra el crecimiento de años anteriores. Pero el cambio político más importante, que provocó una drástica ruptura entre Santos y Uribe, se produciría en el frente interior. Santos había prometido seguir con la campaña de Uribe para destruir a las FARC mediante la presión militar: pocos meses después de asumir el cargo, pudo jactarse de la muerte de Jorge Briceño, comandante del bloque oriental de las FARC. Santos comparó alegremente la muerte de Briceño con el fallecimiento de Osama bin Laden, y ordenó al ejército intensificar la búsqueda de Alfonso Cano. Este cayó víctima de otro ataque militar en noviembre de 2011: el cuarto miembro del secretariado de las FARC, compuesto de siete hombres, muerto en poco más de tres años, un tributo al mayor uso de informantes y de tecnología satélite que las fuerzas armadas colombianas habían podido efectuar gracias al apoyo de Washington.

Pero estos trofeos fueron una especie de veranillo para la contrainsurgencia uribista. En los tres años que se mantuvo al mando, Cano había cambiado de nuevo el método de guerra: al igual que el Estado colombiano había respondido a la nueva estrategia agresiva de las FARC en

la década de 1990 con el Plan Colombia, las FARC respondieron a la «Seguridad Democrática» de Uribe consolidando sus fuerzas en las viejas áreas fuertes y recurriendo a tácticas guerrilleras, en lugar de las ofensivas a gran escala que habían caracterizado su campaña durante la fase expansionista. La retirada de las FARC hacia las regiones selváticas y montañosas restó eficacia a la abrumadora superioridad aérea del ejército. El número de ataques y bajas soportados por las fuerzas gubernamentales empezó a aumentar<sup>17</sup>. A escala más modesta, el ELN intensificó su campaña, tras haber soportado duros golpes en los primeros años del siglo<sup>18</sup>. Ciertamente las guerrillas izquierdistas estaban debilitadas, y ya no podían pensar seriamente en la victoria. Su parcial recuperación militar no ha ido acompañada de un significativo crecimiento político. La insurgencia de las FARC sigue siendo abrumadoramente rural en un país en el que las tres cuartas partes de la población reside en distritos urbanos, y su aislamiento político es prácticamente total: en contraste con la malhadada Unión Patriótica de la década de 1980, que nació como una iniciativa de las FARC, la principal fuerza electoral de la izquierda, el Polo Democrático Alternativo, ha mantenido una decidida distancia respecto a las guerrillas. Pero el éxito militar completo también estaba fuera del alcance del ejército colombiano: las FARC y el ELN conservaban sus estructuras organizativas y de mando a pesar de la intensa presión.

La lógica dictaba que Santos debía retomar las negociaciones, que siempre han formado parte del juego de herramientas contrainsurgente (hasta Uribe mantuvo conversaciones inconclusas con el ELN durante su segundo mandato, y consideró en serio tantear el terreno con las FARC). Pero al dejar el cargo en el preciso momento en el que empezaban a hacerse evidentes, Uribe ya no tuvo que afrontar estas realidades políticas y militares. Ha culpado del aumento de los ataques de las FARC y el ELN, así como de las bajas militares, a un (inexistente) relajamiento de los esfuerzos contrainsurgentes de Santos. Cuando este hizo pública su intención de negociar con las guerrillas, intentó protegerse de la oposición derechista prosiguiendo la guerra: no habría tregua bilateral con los insurgentes durante las conversaciones. Aunque esto tal vez le haya servido para ganarse el respaldo de algunos de los que habían elogiado los éxitos militares de Uribe, no cabía duda de la línea que adoptaría el propio expresidente. Uribe atacó con dureza a Santos y ambos iniciaron una

---

<sup>17</sup> International Crisis Group, *Colombia: ¿por fin la paz?*, cit. pp. 4-5.

<sup>18</sup> International Crisis Group, *Left in the Cold? The ELN and Colombia's Peace Talks*, Latin America Report núm. 51, 26 de febrero de 2014.

batalla por controlar el Partido de la U. La mayoría de sus parlamentarios prefirió conservar el acceso al poder y a los cargos que puede ofrecer el presidente a seguir el purismo ideológico de Uribe. A comienzos de 2013, Uribe y sus partidarios formaron un nuevo partido, absurdamente denominado Centro Democrático, y se alinearon tras su candidato presidencial, Óscar Iván Zuluaga, preparando el escenario para una prueba de fuerza dentro del bloque gobernante.

### *2014: el susto de la primera vuelta*

La polarización entre Santos y Uribe no se basaba en una divergencia significativa acerca de la política económica. Aunque Santos hablaba de su admiración por Franklin Roosevelt e incluso afirmaba que le gustaría ser tildado de «traidor a su clase», el gobierno siguió la senda establecida por su predecesor, confiando en los sectores minero y energético para sacar adelante la economía y renovando los esfuerzos para alcanzar un tratado de libre comercio con Estados Unidos<sup>19</sup>. El crecimiento medio entre 2010 y 2014 rondó el 5 por 100, aunque ello no alteró una desigualdad de vértigo<sup>20</sup>. Fueron las conversaciones con representantes de las FARC en La Habana las que generaron el enfrentamiento entre ambos bandos. Santos tenía las ventajas del cargo y del aparato de partido, que había arrebatado al control de Uribe: el expresidente lo acusó con dureza de usar recursos estatales («mermelada») para comprar votos. Uribe y Zuluaga reunieron a sus seguidores en torno a un llamamiento a la victoria total sobre las FARC. Con independencia de que el bando uribista creyese o no de verdad que esto estaba a su alcance, ocho años de guerra total les habían enseñado que podían limitar en gran medida el conflicto a las zonas rurales, minimizando la distorsión de la vida cotidiana en las ciudades. Las semanas anteriores a los comicios en primera vuelta estuvieron dominadas por alegaciones de que la campaña de Zuluaga había intentado obtener información clasificada sobre las conversaciones de paz para utilizarla contra Santos: cinco días antes de la votación, *Semana* publicó un vídeo que parecía mostrar a Zuluaga analizando diversas estrategias para usar dicho material con un *hacker* que en ese momento estaba incriminado<sup>21</sup>. Zuluaga se negó a responder preguntas de la prensa en los últimos días de la campaña, pero la controversia no

<sup>19</sup> «Traitor to his class»: Simón Romero, «Colombia leader seeks wide-ranging changes, and looks beyond the US», *The New York Times*, 5 de marzo de 2011.

<sup>20</sup> Economist Intelligence Unit, *Colombia: Country Report October 2014*, p. 11.

<sup>21</sup> «El video del “hacker” y Zuluaga», *Semana*, 17 de mayo de 2014.

le impidió encabezar la votación, convirtiéndola en un enfrentamiento directo con Santos en segunda vuelta (Cuadro 1). Lo más alarmante para Santos era que había sido derrotado en las dos ciudades más grandes, Bogotá y Medellín, en las que los votos obtenidos por su partido descendieron en todos los grupos respecto a las elecciones legislativas de marzo (Cuadros 2 y 3). Zuluaga obtuvo sus mejores resultados en Antioquia, feudo uribista cuya capital es Medellín: allí, su margen de victoria sobre Santos fue del 40 por 100 (658.313 frente a 282.111 votos).

CUADRO 1.  
*Resultados de las elecciones presidenciales en primera vuelta, mayo de 2014*

<i>Partido</i>	<i>Candidato</i>	<i>Votos</i>	<i>%</i>
Centro Democrático	Óscar Iván Zuluaga	3.759.971	29
Unidad Nacional	Juan Manuel Santos	3.301.815	26
Partido Conservador	Marta Lucía Ramírez	1.995.698	16
Polo Democrático Alternativo y Unión Patriótica	Clara López	1.958.414	15
Alianza Verde	Enrique Peñalosa	1.065.142	8

CUADROS 2 y 3.  
*Descenso del porcentaje de votos de Santos y aumento del porcentaje de Zuluaga, marzo-mayo 2014*

<i>Ciudad</i> <i>(población: 2011)</i>	<i>Coalición de</i> <i>Santos: marzo 2014</i>	<i>Santos:</i> <i>mayo 2014</i>	<i>Diferencia (%)</i>
Bogotá (8,75 mill.)	503.601	444.051	-12
Medellín (3,7 mill.)	104.736	69.381	-34
Cali (2,45 mill.)	158.845	128.836	-19
Barranquilla (1,9 mill.)	162.222	81.892	-50
Bucaramanga (1,1 mill.)	67.286	51.945	-23
Cartagena (988.000)	100.066	37.776	-62

  

<i>Ciudad</i>	<i>Partido de Zuluaga:</i> <i>marzo 2014</i>	<i>Zuluaga:</i> <i>mayo 2014</i>	<i>Diferencia (%)</i>
Bogotá	373.798	542.432	45
Medellín	204.467	268.915	32
Cali	63.479	98.334	55
Barranquilla	31.216	47.174	51
Bucaramanga	33.700	48.652	44
Cartagena	30.250	45.581	51

Casi el 40 por 100 de los votos de la primera vuelta fue a parar a candidatos de partidos más pequeños: Marta Lucía Ramírez, del Partido Conservador; Clara López, del Polo Democrático Alternativo; y Enrique Peñalosa, de Alianza Verde. Ramírez se puso enseguida del lado de Zuluaga, en línea con sus conocidas simpatías por el uribismo. Si sus partidarios se unían a los de Zuluaga, Santos se enfrentaría a un bloque de derechas respaldado casi por el 45 por 100 de los votantes. El Partido Conservador, sin embargo, estaba dividido, ya que buena parte de los parlamentarios preferían aliarse con Santos. Tras una tensa espera de 24 horas, estos parlamentarios, que controlaban de hecho la mayor parte de la maquinaria electoral del partido, optaron por el presidente. Es dudoso que Santos hubiera podido ser reelegido sin el respaldo de estos conservadores «rebeldes». Enrique Peñalosa, que recibió el respaldo de Uribe cuando se presentó a las elecciones para la alcaldía de Bogotá en 2011, se mantuvo al margen, junto con su partido, aunque a los afiliados de Alianza Verde se les permitió apoyar a Santos o a Zuluaga a título individual.



Quedaban Clara López y el Polo. Como Santos, López pertenece a una notable dinastía colombiana: dos miembros de su familia ocuparon el cargo de presidente en el siglo XX, y ella misma trabajó para el gobierno de su tío Alfonso López Michelsen en la década de 1970, antes de afiliarse a la izquierdista Unión Patriótica en la década siguiente. Tras ser convocada para sustituir a un controvertido alcalde de Bogotá acusado de corrupción, dio la cara por el Polo y ganó fama de ser una soberbia administradora. Su apoyo sería valiosísimo para Santos, en especial en Bogotá, donde la candidata de izquierda había obtenido más votos que el presidente: en los barrios más pobres de la capital, el principal enfrentamiento se dio entre Zuluaga y López, no entre Zuluaga y Santos (Cuadro 4)<sup>22</sup>. Pero el Polo

<sup>22</sup> Las últimas tres elecciones a la alcaldía de Bogotá –donde reside casi la quinta parte de la población colombiana– las han ganado candidatos del Polo: Lucho Garzón, Samuel Moreno y Gustavo Petro.

estaba dividido respecto a la cuestión de respaldar a Santos. López se unió con entusiasmo a la campaña del presidente para la segunda vuelta, al igual que otros miembros importantes del partido, como Iván Cepeda. Por el contrario, Jorge Enrique Robledo, el senador más votado en las elecciones parlamentarias de 2014, instó al Polo a mantenerse neutral y criticó la posición adoptada por López. El comité central del Polo dio a sus afiliados la libertad de apoyar a Santos a título individual, sin conceder al presidente el respaldo colectivo del partido. Aunque López lograra persuadir a todos sus partidarios de que votasen por Santos, esto todavía seguiría a la zaga de Zuluaga. Tenía que encontrar otras fuentes de apoyo, pero ¿dónde?

CUADRO 4. Resultados en primera vuelta en Bogotá, por distrito

Estrato económico (1 = pobre, 5 = rico)	Distrito	Zuluaga	Ramírez (Conservador)	Santos	López (Polo-UP)	Peñalosa (Verdes)
1	Ciudad Bolívar	27,3	17,7	15,6	21,6	5,7
		19,2	1,8	11,4	61,9	1,7
1,5	Usme	24,7	18,8	14,7	22,9	6,8
2	Bosa	23,0	17,9	13,8	23,7	9,5
	San Cristóbal	19,1	18,4	16,8	23,8	8,6
	Santa Fe	21,9	13,3	21,4	22,1	10,5
	Tunjuelito	22,0	16,2	16,5	23,2	10,2
2,5	Candelaria	16,3	11,6	23,2	25,5	11,2
	Engativá	19,2	14,6	18,6	20,1	16,5
	Rafael Uribe	22,2	16,4	17,5	22,7	9,0
3	Antonio Nariño	21,7	13,1	17,9	23,1	13,3
	Kennedy	21,6	15,7	15,9	22,6	12,7
	Mártires	25,3	12,2	21,5	18,4	12,7
	Puente Aranda	22,3	13,9	18,1	20,8	14,1
3,5	Barrios Unidos	21,0	12,3	20,7	17,2	19,2
	Fontibón	20,2	15,7	17,6	20,2	15,2
	Suba	22,6	14,1	17,0	16,7	20,6
	Teusaquillo	18,5	8,8	22,2	20,2	21,3
5	Chapinero	23,3	10,0	22,2	14,9	22,5
	Usaquén	24,6	12,3	18,1	14,1	23,5

Ante la perspectiva de derrota, Santos jugó la mano más dura de su trayectoria política. Reorganizó su campaña nombrando director de la misma al expresidente César Gaviria. Al comienzo de la presidencia de Uribe, Gaviria había sido quien más se había esforzado por salvar de la extinción al Partido Liberal, pagado de deserciones al bando uribista al principio de

su presidencia. Principal arquitecto de la Constitución de 1991, exsecretario de la Organización de Estados Americanos, Gaviria tenía la visión y el perfil adecuados para cavar una trinchera desde la que oponerse (con resultados ambiguos) a los intentos de Uribe de modificar el orden constitucional. Fue recuperado de su retiro—desde el que defendía la legalización de las drogas en compañía del brasileño Fernando Enrique Cardoso y el mexicano Ernesto Zedillo— para capitanear el zozobante barco del presidente<sup>23</sup>. Tras este movimiento, Santos redefinió su candidatura como un frente amplio para la paz, proclamando que se trataba de elegir entre «quienes, como yo, quieren el fin de la guerra y quienes prefieren una guerra sin fin». Obtuvo el respaldo de la senadora verde Claudia López, de su oponente en 2010 Antanas Mockus, y de la otrora secuestrada de las FARC Ingrid Betancourt, todos los cuales grabaron mensajes de apoyo televisados en las últimas fases de la campaña. El vital anuncio electoral de Betancourt se emitió tres días antes de la segunda vuelta electoral: «Los que hemos sufrido la guerra tenemos muchos motivos para defender el acuerdo de paz, lo más importante es detener el sufrimiento de otros colombianos [...]. Por eso, apoyo el proceso de paz que está liderando el presidente Santos: por encima de todo, la paz». López instaba a los votantes a optar por «la forma más rápida y menos violenta de poner fin a las FARC [...]». Vota pensando en tu interés, vota para acabar con las FARC».

CUADRO 5. Resultados en segunda vuelta, junio de 2014

Partido	Candidato	Votos	%
Unidad Nacional	Juan Manuel Santos	7.816.986	51
Centro Democrático	Óscar Iván Zuluaga	6.905.001	45
		Participación:	47.9

Los grupos económicos más poderosos de Colombia, que temían las consecuencias desestabilizadoras de una victoria Zuluaga-Uribe, también apoyaron al presidente. Cuatro días antes de la segunda vuelta, ochenta de los empresarios más influyentes del país firmaron una carta de apoyo a Santos en la que resaltaban sus logros económicos. Todo esto a pesar de que una encuesta muy difundida daba a Zuluaga una ventaja de ocho puntos sobre Santos. Diez días antes de las elecciones, el periodista de *El*

<sup>23</sup> La vuelta de Gaviria simplemente resaltaba la crisis de liderazgo en el Partido Liberal, que sigue estado dominado por el nepotismo político (el hijo de Gaviria, Simón, fue presidente del partido entre 2011 y 2013).



*Tiempo* Jorge Orlando Melo describía con crudeza la división de Colombia en dos bandos, uno a favor de la herencia de Uribe, y el otro en contra:

Los columnistas, los llamados intelectuales, apoyan la reelección, con una casi unanimidad que contrasta con un país dividido por la mitad [...]. Nunca antes hubo tal distancia entre los que se conocen con optimismo como «los formadores de opinión» y la opinión<sup>24</sup>.

CUADROS 6 y 7: Aumento de votos por Santos y Zuluaga, mayo-junio de 2014

Ciudad	Votos para Santos: mayo de 2014	Votos para Santos: junio de 2014	% de diferencia
Bogotá	444.051	1.337.349	201
Medellín	69.381	208.597	201
Cali	128.836	375.371	191
Barranquilla	81.892	267.654	227
Bucaramanga	51.945	130.869	152
Cartagena	37.776	119.841	217

  

Ciudad	Votos para Zuluaga: mayo de 2014	Votos para Zuluaga: junio de 2014	% de diferencia
Bogotá	542.432	1.075.638	98
Medellín	286.915	447.208	66
Cali	98.334	202.793	106
Barranquilla	47.154	85.755	82
Bucaramanga	48.652	92.538	90
Cartagena	45.581	89.878	97

### Los dividendos de la paz

La apuesta por un frente de paz amplio le compensó a Santos el 14 de junio, día de las elecciones, cuando superó el reto de Zuluaga por un cómodo margen (Cuadro 5). Zuluaga aumentó su apoyo en todas las

<sup>24</sup> Jorge Orlando Melo, «El poder del voto nuevo», *El Tiempo*, 4 de junio de 2014. Una notable excepción a esta norma fue el novelista William Ospina, cuyo respaldo a Zuluaga como «el menor de los dos males» causó mucho revuelo, en buena parte por la reputación de izquierdista del escritor: «El uribismo es responsable de muchas cosas malas que le han pasado a Colombia en los últimos veinte años, pero el santismo es responsable de todas las cosas malas que han pasado en Colombia en los últimos cien años [...]. No es algo personal: Santos es un hombre inteligente, sagaz y hasta elegante. Pero la mirada que arroja sobre el mundo, la manera de su gobierno, es la de la vieja elite bogotana que se siente designada por Dios para manejar este país con una mezcla de desdén y de indiferencia que aterra», William Ospina, «De dos males», *El Espectador*, 31 de mayo de 2014.

grandes ciudades, pero fue desplazado por Santos, que triplicó con creces sus votos en Bogotá, Medellín y Barranquilla: la capital optó por Santos, aunque Medellín sigue siendo una ciudad uribista (Cuadros 6 y 7). La participación creció significativamente en dos millones y medio de votos, pasando del 40 por 100 en la primera vuelta a casi el 48 por 100 en la segunda<sup>25</sup>. Santos obtuvo una amplia mayoría en distritos de Bogotá en los que había ocupado el tercero o incluso el cuarto lugar en su primer intento: San Cristóbal, Santa Fe, Engativá, Antonio Nariño, Kennedy y Puente Aranda.

La victoria de Santos garantizaba el mantenimiento de las negociaciones con las FARC. ¿Pero cuál es el probable resultado de dichas conversaciones? En cierta medida, el ruido y la furia de la batalla entre Santos y Uribe han desviado la atención del probable carácter de cualquier acuerdo de paz. En septiembre de 2014, Santos y las FARC aceptaron publicar el texto del borrador de los acuerdos alcanzados hasta entonces en las conversaciones de La Habana. El presidente insistió en que «esto debería poner fin a todas las especulaciones erróneas que personas que no son amigas del proceso han estado difundiendo [...]; no estamos negociando nuestro sistema democrático, nuestro modelo económico, nuestro desarrollo ni nuestras instituciones»<sup>26</sup>. De hecho, hay pocas probabilidades de que en virtud del posible acuerdo de paz se produzca una ruptura clara con el modelo económico consolidado con Uribe y Santos. Para sus defensores, dicho modelo ha sido beneficioso y no debería ponerse en duda. Colombia, la cuarta economía más grande de América Latina en estos momentos, es también el mejor país de la región para hacer negocios, de acuerdo con el Banco Mundial, por delante de Chile y Perú. La Economist Intelligence Unit (EIU) pronosticó un «robusto» crecimiento del PIB con Santos, con una media del 4,5 por 100 a lo largo del segundo mandato presidencial<sup>27</sup>. Hay otra distinción nacional que con menos probabilidad resaltarán los admiradores de Colombia: sigue siendo uno de los países más desiguales del mundo, con un coeficiente de Gini que supera con creces el de México o el de Brasil.

El sector petrolífero y el minero constituyen el centro de este modelo, y han protegido a Colombia de las peores consecuencias de la crisis económica

---

<sup>25</sup> A diferencia de ello, la segunda vuelta de las elecciones de 2010 había experimentado una caída en la participación del 5 por 100.

<sup>26</sup> Andrew Willis, «Colombia to create new congressional seats under FARC peace deal», *Bloomberg*, 24 de septiembre de 2014.

<sup>27</sup> Banco Mundial, *Doing Business 2015*, p. 4; Economist Intelligence Unit, *Colombia: Country Report November 2014*, p. 2.

mundial: en 2011 representaron el 8 por 100 del PIB, pero el 70 por 100 de las exportaciones totales. Se espera que la producción petrolífera alcance un máximo de 1,2 millones de barriles diarios en 2015, para comenzar después a descender de manera constante; las reservas de gas y petróleo demostradas se agotarán en siete u ocho años<sup>28</sup>. Esta es un área en la que se puede esperar que un acuerdo de paz produzca dividendos rápidos: el gobierno ha culpado del primer descenso de la producción petrolífera desde 2005 a la reanudación de los ataques guerrilleros contra los oleoductos<sup>29</sup>. Pero la EIU advierte de que «la inversión en sectores extractivos se moderará a medio plazo, en línea con el estancamiento de precios de las materias primas y el aumento de conflictos sociales y medioambientales que rodean los nuevos proyectos»<sup>30</sup>. En todo caso, como ha reconocido la OCDE, la minería y los hidrocarburos tienden a exigir grandes capitales y no crean muchos puestos de trabajo<sup>31</sup>. Menos frecuentemente resaltado es el vínculo entre dicha actividad y la conculcación de derechos humanos. Un informe publicado en 2013 por la Contraloría General colombiana ponía de manifiesto una asombrosa correlación: el 80 por 100 de las violaciones de derechos humanos ocurrió en municipios con grandes proyectos mineros y energéticos, a pesar de que dichos municipios equivalen solo al 35 por 100 del total; el 87 por 100 de los desplazamientos forzados, el 78 por 100 de los crímenes contra sindicalistas y el 89 por 100 de los atentados contra indígenas tuvieron lugar en estos territorios<sup>32</sup>. El informe concluía también que existían enormes fugas fiscales del sector minero, reduciendo los beneficios económicos para Colombia.

Si bien el desempleo ha caído durante el mandato de Santos, desde algo más del 10 por 100 en 2010 al 7,9 en 2014, se debe en parte a un significativo aumento de los gastos públicos en programas sociales. A comienzos de 2013, Santos presentó planes para canalizar cinco billones de pesos (2,75 millardos de dólares estadounidenses) hacia una variedad de proyectos, como infraestructuras públicas, subvenciones para vivienda y ayudas a las manufacturas<sup>33</sup>. La comisión económica regional de Naciones Unidas,

<sup>28</sup> Estudios económicos de la OCDE, *Colombia: evaluación económica*, enero de 2013, p. 18.

<sup>29</sup> Óscar Medina y Andrew Willis, «Colombia growth slows more than forecast amid rebel attacks», *Bloomberg*, 16 de septiembre de 2014.

<sup>30</sup> EIU, *Colombia: Country Report November 2014*, p. 8.

<sup>31</sup> OCDE, *Colombia, evaluación económica*, cit., p. 3.

<sup>32</sup> Contraloría General de la República, *Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista*, Bogotá, 2013. Véase también ABC Colombia, *Giving It Away: The Consequences of an Unsustainable Mining Policy in Colombia*, Londres, 2012.

<sup>33</sup> Ómar Ahumada Rojas, «Gobierno presenta su plan de choque para estimular la economía», *El Tiempo*, 15 de abril de 2013; Eduardo García y Nelson Bocanegra, «Colombia's plan to spur economic growth, curb peso rise», *Reuters*, 15 de abril de 2013.

CEPAL, considera que la inversión pública es uno de los principales factores que permiten a Colombia alcanzar tasas de crecimiento superiores a la media<sup>34</sup>. La intervención estatal ha sido crucial para el auge de la construcción en las ciudades colombianas: la construcción de viviendas y edificios comerciales creció el 14 por 100 en 2014<sup>35</sup>. Santos ha lanzado también un amplio programa para mejorar el sistema de transportes colombiano, y planea invertir casi 50 millardos de dólares en redes de carreteras, fluviales y ferroviarias, instalaciones portuarias y en la ampliación del aeropuerto de Bogotá; se espera que estos proyectos inyecten en la economía 5.000 millones de dólares anuales entre 2016 y 2020<sup>36</sup>.

Los acuerdos preliminares entre los equipos que están negociando en Cuba han dejado fuera de la mesa la reforma agraria radical<sup>37</sup>. El gobierno ha aceptado lanzar un proceso nacional de restitución de tierras y formalización de propiedades y ha decidido asignar ciertos territorios a «reservas campesinas», en las que se reconocerán formas de propiedad colectiva y autonomía política y económica; a esto podemos añadir las habituales referencias a infraestructura, regadío, crédito, comercialización y demás. La *restitución* de la tierra –devolución de las tierras robadas a sus legítimos propietarios– debe distinguirse claramente de un proyecto de *reforma* agraria más ambicioso y general:

Colombia tiene una de las distribuciones de la tierra más desiguales del mundo. El problema, sin embargo, no son las tierras en manos de grupos ilegales, sino las enormes porciones de tierra en manos de las principales familias del país, entre ellas los legisladores. La confiscación de tierras efectuada ilegalmente por paramilitares o narcotraficantes hace tiempo que está incluida en los códigos de leyes. Aunque es algo bien recibido, no soluciona la desigualdad en la distribución de tierras. Por añadidura, debido a la falta de voluntad política, ni siquiera esta tímida medida se ha aplicado adecuadamente<sup>38</sup>.

---

<sup>34</sup> Fernando González, «El país, tercero en expansión económica, pero depende de exportaciones», *El Tiempo*, 5 de agosto de 2014.

<sup>35</sup> Matthew Bristol y Christine Jenkins, «Colombia's economy Grew 4.2 per cent in 3Q on construction boom», *Bloomberg*, 15 de diciembre de 2014. Sin embargo, el senador Enrique Robledo, del Polo Democrático Alternativo, ha acusado al gobierno de Santos de haber construido solo el 7 por 100 de las 100.000 viviendas prometidas para familias de rentas bajas: «Solo se ha entregado el 7% de las casas prometidas por Santos: Robledo», *Radio Caracol*, 8 de mayo de 2014.

<sup>36</sup> Andrés Schipani, «Ambitious plans to transform Colombia», *Financial Times*, 17 de noviembre de 2014.

<sup>37</sup> «FARC y gobierno logran acuerdo en tema agrario», *Semana*, 26 de mayo de 2013.

<sup>38</sup> Lara Montesinos Coleman y Gearóid Ó Loingsigh, *Peace in Colombia: Reality, Myth and Wishful Thinking*, Brighton y Bogotá, abril de 2013, pp. 5-6. La restitución de tierras está también compensada con salvedades dirigidas a proteger el modelo

Los reclamantes de las tierras y sus defensores deben soportar amenazas de muerte por parte de los paramilitares supuestamente desmovilizados: al menos treinta y cinco personas han sido asesinadas hasta el momento<sup>39</sup>. No es de extrañar que el ritmo de restitución de tierras haya sido lento y que a finales de 2014 se hubiesen distribuido con este modelo menos de 70.000 hectáreas<sup>40</sup>.

### ¿Una paz de supervivientes?

Ambas partes negociadoras han aceptado de manera tácita que la victoria completa está fuera de su alcance. Lo que salga de las conversaciones será producto del agotamiento mutuo: una paz de supervivientes, no de vencedores<sup>41</sup>. Se dan a este respecto ciertos parecidos con la transición sudafricana tras el *apartheid*, pero con la diferencia de que la posición negociadora de la guerrilla es mucho más débil de lo que era la del Congreso Nacional Africano a comienzos de la década de 1990. A cualquier observador le quedaba claro que tan pronto como se celebrasen elecciones libres en Sudáfrica el CNA se convertiría en el partido más fuerte y tomaría las riendas del poder. El régimen del *apartheid* había sido ampliamente deslegitimado en todo el mundo, y hasta firmes aliados como Thatcher y Reagan se vieron obligados a distanciarse de Pretoria. La rama militar del CNA era probablemente menos competente en el campo de batalla de lo que las FARC lo son en la actualidad, pero la fuerza política del movimiento compensaba con creces esa deficiencia. Los dirigentes del CNA podían de ese modo regatear con el Partido Nacionalista, ofreciéndole amnistía y la conservación del statu quo económico a cambio de una entrega voluntaria del poder. En Colombia, por el contrario, la base política de las FARC y del ELN es mucho más débil.

---

agroexportador: «El gobierno no devuelve las tierras sin más. Hay que soportar un prolongado proceso judicial, en el que la carga de la prueba se sitúa sobre el campesino que las reclama. Una vez demostrada su pretensión legal, para acceder a las tierras los campesinos tienen que aceptar plantar cultivos comerciales, como palma africana, caña de azúcar, caucho, cacao e incluso ciertas hortalizas para el mercado europeo, como los espárragos, que no forman parte de la dieta colombiana». De acuerdo con el Programa de Desarrollo Humano de Naciones Unidas, el 1,15 por 100 de la población colombiana es propietaria del 52 por 100 de las tierras: la segunda mayor concentración de América Latina, solo superada por Paraguay.

<sup>39</sup> Amnistía Internacional, *Un título de propiedad no basta: por una restitución sostenible de tierras en Colombia*, Londres, 2014, pp. 31-38.

<sup>40</sup> Mark Anderson, «Colombia's poor hit by tardy progress on land restitution, says Amnesty», *The Guardian*, 27 de noviembre de 2014.

<sup>41</sup> Respecto al concepto de «paz de supervivientes», véase Thabo Mbeki y Mahmood Mamdani, «Courts can't end civil wars», *The New York Times*, 5 de febrero de 2014.

Desde la desaparición de la Unión Patriótica, ningún partido civil importante se ha aliado con las guerrillas, y ciertamente no hay posibilidades de que candidatos cercanos a las FARC obtengan una amplia mayoría y formen un gobierno, como el CNA pudo hacer en 1994.

Irlanda del Norte ofrece un ejemplo de proceso de paz situado a medio camino entre el caso sudafricano y el colombiano<sup>42</sup>. Ha sido citado como modelo tanto por negociadores de las FARC como por Santos, para quien «el acuerdo preliminar anunciado con las FARC se inspiró en el acuerdo marco con el IRA»<sup>43</sup>. Se pueden establecer ciertamente paralelismos entre ambos conflictos. A comienzos de la década de 1990, estaba claro que el ejército y los servicios de espionaje británicos habían contenido al IRA, pero tenían pocas perspectivas de lograr una victoria contundente. A diferencia de las FARC, el IRA tenía un brazo político, el Sinn Féin, capaz de organizarse de manera legal sin ser aniquilado, como lo había sido la UP. El Sinn Féin estaba apoyado por una minoría de la población nacionalista, que a su vez constituía una minoría de la población total de Irlanda del Norte: no era posible que el gobierno británico cediese sin más el poder a los líderes del partido, como había ocurrido en Sudáfrica. El acuerdo de paz de 1998, sin embargo, establecía que los partidos unionistas y los nacionalistas debían compartir el poder, lo cual garantizaba al Sinn Féin un lugar en el gobierno. Las FARC no recibirán esas garantías cuando concluyan las conversaciones, aunque Santos ha insistido en que «pueden perseguir sus objetivos, pero por canales democráticos legales. Estoy dispuesto a concederles todas las garantías necesarias para que tengan esta oportunidad. Que ganen o no, dependerá de ellos»<sup>44</sup>.

Hasta esa modesta apertura es inaceptable para el bloque de rechazo encabezado por Uribe y Zuluaga, para quienes la paz de los vencedores es la única digna de ser contemplada. Casi siete millones de votantes refrendaron este punto de vista en junio de 2014, y Uribe ha seguido movilizándolo

---

<sup>42</sup> Los conflictos norirlandés y colombiano se entrecruzaron en vísperas de la subida de Uribe al poder, cuando tres republicanos irlandeses fueron detenidos tras salir de territorio dominado por las FARC y acusados de proporcionar ayuda militar a la guerrilla; ellos insistieron en que habían viajado a Colombia como observadores del proceso de paz, en aquel momento a punto de romperse. Los tres fueron primero absueltos y después condenados tras la apelación del fiscal, y finalmente huyeron y reaparecieron en la República de Irlanda, protegidos por la ausencia de tratado de extradición con Colombia.

<sup>43</sup> Jonathan Watts y Sibylla Brodzinsky, «Colombia closes in on a peace deal that could end world's longest civil war», *The Guardian*, 16 de marzo de 2014. Políticos norirlandeses viajaron a Colombia y Cuba en 2012-2013 para hablar con ambas partes de las negociaciones y ofrecer asesoramiento.

<sup>44</sup> *Ibid.*

manifestaciones contra la «impunidad» de las FARC (ni que decir tiene que la impunidad del ejército y los grupos paramilitares se da por sentada). El actual proceso descansa sobre un precario equilibrio, y la opción inmediata se sitúa entre un acuerdo de paz defectuoso y la continuación de la guerra. El bando uribista obtiene su fuerza de la indiferencia de quienes pueden permitirse tener las zonas rurales encharcadas en sangre. El economista del desarrollo Lauchlin Currie sostenía a finales de la década de 1960 que ese conflicto podía de hecho beneficiar a la economía colombiana, al acelerar la despoblación rural y generar una reserva de mano de obra barata para la industrialización urbana. Un flujo siempre creciente de campesinos sin tierra y desposeídos –los desplazados– se ha incorporado, con éxito variable, a los proyectos de construcción financiados con ahorros protegidos de la inflación<sup>45</sup>. En el proceso, un Estado bifurcado abandonó de hecho la Colombia rural –el último censo agrario se efectuó en 1970– dejando que el ejército lidiase con las consecuencias a su horrible modo.

En diciembre de 2014, en un intento de garantizar el éxito de las conversaciones, los dirigentes de las FARC declararon un alto el fuego unilateral. Si Santos consigue imponerse a la oposición de extrema derecha y firmar un acuerdo con las FARC, no se producirá una transformación rápida, ni reformas sociales de gran alcance: eso sí está claro. ¿Pero se respetará al menos su promesa de que los guerrilleros desmovilizados (y la izquierda civil) «podrán perseguir sus objetivos mediante canales democráticos legales»? Para que esto ocurra deberán abordarse dos cuestiones fundamentales. En todo el país se mantienen activos «grupos sucesores» de los paramilitares. Sus recientes actividades en Buenaventura, una ciudad portuaria del Pacífico con 290.000 habitantes, han sido documentadas en detalle por Human Rights Watch:

Los grupos sucesores de paramilitares son responsables de la desaparición de una gran cantidad –posiblemente cientos– de residentes de Buenaventura durante los últimos años. Estos grupos descuartizan a sus

---

<sup>45</sup> Lauchlin Currie (1902-1993) es una figura curiosa: nacido en Canadá, educado en Harvard y en la London School of Economics, adquirió la ciudadanía estadounidense y trabajó para el Departamento del Tesoro entre 1934 y 1939 antes de obtener un cargo de economista en la Casa Blanca de Franklin D. Roosevelt. Destinado a China durante la guerra como enviado ante Chiang Kai-Shek, más tarde fue acusado de espiar para Moscú y desposeído de su pasaporte en 1954, mientras él se encontraba en Colombia, evaluando su economía para el Banco Mundial. Se casó con una colombiana y adquirió la nacionalidad; se convirtió en economista jefe del Departamento Nacional de Planificación, cargo que ocupó entre 1971 y 1981 y que utilizó para promover una concepción coherentemente definida que priorizaba el sector de la construcción urbana. Murió en Bogotá en 1993 y recibió la máxima distinción civil colombiana.

víctimas y arrojan los restos humanos a la bahía o en los manglares que se extienden en sus orillas, o los entierran en fosas clandestinas, según han señalado residentes y funcionarios. En varios de los barrios, los residentes denuncian que existen «casas de pique», donde los grupos desmiembran a sus víctimas [...]. La Fiscalía General de la Nación ha iniciado más de 2.000 investigaciones de casos de desaparición y desplazamiento forzado perpetrados en Buenaventura por diversos actores en las dos últimas décadas, pero ninguna ha tenido como resultado una condena<sup>46</sup>.

Mientras estos grupos permanezcan activos, quienes se oponen al statu quo no tendrán libertad para organizarse políticamente. Esto nos lleva a la segunda cuestión: la actitud del Estado colombiano. Las pruebas de complicidad entre el Estado y las fuerzas paramilitares son tan voluminosas que abruma<sup>47</sup>. El Centro para la Investigación y la Educación Popular (CINEP), una ONG colombiana, registró 1.332 violaciones de derechos humanos en 2013: ejército, policía y paramilitares fueron responsables de la abrumadora mayoría de dichos abusos (el 87 por 100)<sup>48</sup>. Santos tendrá que imponer una ruptura decisiva con estas prácticas si quiere que se cumpla su promesa de proporcionar «todas las garantías necesarias» para una participación abierta en la vida política. No es muy auspicioso que el presidente haya propuesto la aprobación de legislación que fortalecerá la impunidad al transferir las competencias sobre los «falsos positivos» a los tribunales militares<sup>49</sup>. Pero será por este criterio mínimo –la libertad de los movimientos sociales para operar sin temor al asesinato a manos de agentes estatales o paramilitares– por el que se juzgará en último término el valor a largo plazo de cualquier acuerdo de paz.

---

<sup>46</sup> Human Rights Watch, *La crisis en Buenaventura. Desapariciones, desmembramientos y desplazamiento en el principal puerto de Colombia en el Pacífico*, Nueva York, 2014, pp. 2-5. HRW también ha concluido que «existe una profunda desconfianza hacia las autoridades y una sensación generalizada de indefensión ante los abusos que cometen constantemente estos grupos [...]. Numerosos residentes de Buenaventura han perdido completamente su confianza en la capacidad del gobierno de protegerlos».

<sup>47</sup> En octubre de 2014, un tribunal de Bogotá sentenció al dirigente de las AUC Salvatore Mancuso a ocho años de cárcel –la sentencia máxima permitida por la Ley de Justicia y Paz– y estableció que dicha colaboración había sido la política oficial en el departamento del Norte de Santander; de acuerdo con el propio Mancuso, «sin la ayuda de las Fuerzas Militares no hubiese sido posible la consolidación del Bloque en la región. Actuábamos en conjunto». Mancuso confesó su participación en trescientos asesinatos: «Fui adoctrinado por el Ejército y la Policía»: Mancuso», *El Tiempo*, 31 de octubre de 2014.

<sup>48</sup> La responsabilidad la comparten a partes iguales los grupos paramilitares (44 por 100) y las fuerzas estatales (43 por 100): CINEP, *Banco de Datos de Violencia Política: Julio-Diciembre 2013*, Bogotá, 2014.

<sup>49</sup> José Miguel Vivanco y Max Schoening, «Colombia's compromise with murder», *The New York Times*, 12 de noviembre de 2014.